

Bibliotecas y derecho de autor en el Perú

Por

Antonio Cajas Rojas

Pontificia Universidad Católica del Perú

acajas@pucc.edu.pe

(PERÚ)

Resumen:

Analiza los artículos de la ley vigente sobre el derecho de autor en el Perú. Se examinan y discuten cuatro artículos del D.L. 822 (23.04.1996) ley vigente sobre el derecho de autor en el Perú. Estos artículos pertenecen al título IV que versa acerca de los límites de explotación de las obras protegidas. El cuestionamiento que se hace es que la legislación peruana permite de manera muy restringida a bibliotecas y archivos públicos prestar, copiar partes, y comunicar públicamente documentos impresos pero de ningún modo lo permite con documentos audiovisuales y electrónicos. Esto perjudicaría y afectaría aun más a los usuarios de las bibliotecas y archivos pues los dejaría sin la posibilidad de acceso a todo un abanico de documentación no impresa. Se plantea la modificación de los artículos correspondientes por medio de la exigencia al Congreso de la República por parte la sociedad civil en especial del gremio bibliotecario.

Se señala también que los acuerdos internacionales de propiedad intelectual han enfatizado los beneficios patrimoniales en contra del acceso del público a las obras creadas y por crearse. Este acceso ha sido ofrecido al público tradicionalmente por las bibliotecas y archivos públicos. Estas instituciones son las más adecuadas para combinar de manera armónica los legítimos derechos de los autores o productores de obras con los del público usuario. Por lo tanto, al enfatizar los beneficios económicos en la protección del derecho de autor y restringir las prácticas de uso justo de estas instituciones lo único que se logra es empobrecer a la sociedad e incrementar los usos ilegítimos como es la piratería intelectual.

Palabras clave:

Derecho de autor, Propiedad intelectual, Autores, Perú

Introducción

El presente artículo busca llamar la atención de los bibliotecarios del país acerca de las repercusiones del Decreto Legislativo 822¹, ley vigente sobre el Derecho de autor, en los artículos que componen su título IV que lleva por nombre: *De los límites al derecho de explotación y de su duración*.

El autor de la ley no ha sido consciente de lo perjudicial que pueden ser estos artículos para la labor de los bibliotecarios y el funcionamiento de las pocas bibliotecas que existen en el Perú. Por este motivo, el principal objetivo de este trabajo es juntar esfuerzos de todos los involucrados, en especial de los bibliotecarios que trabajan en el

¹ PERU. Decreto legislativo 822 : Ley sobre el Derecho de Autor. Publicado en el diario El Peruano el 24 de abril de 1996. En: Normas Legales : Revista de Legislación y Jurisprudencia. Vol. CCXXXIX. Tomo 239. Abril de 1996, p. 421-456.

Perú, para las modificaciones que, como se verá, requiere esta parte de la ley de manera urgente.

Se parte de la premisa que las leyes de propiedad intelectual o derecho de autor en el país y en la región no deben olvidar la política general del Estado que debiera ser el fomento a la lectura y el acceso a la información para todos los ciudadanos. Esta política, que permitiría un gran desarrollo individual y colectivo, no existe en la agenda política peruana. Por el contrario, como se intentará demostrar, el Decreto Legislativo 822 enfatiza los intereses de explotación comercial del derecho de autor y deja de lado el interés de la sociedad a la información cuyo bastión es, en todas partes del orbe, la biblioteca pública.

Las excepciones o límites al derecho de explotación y su duración (artículos 41 al 51) se centran en permitir el acceso y préstamo a textos impresos dejando de lado los demás soportes de información como las videgrabaciones, las grabaciones sonoras, y los recursos electrónicos en soporte físico o de acceso virtual. Lo que es muy grave es que la ley peruana solo permite el préstamo público de documentos escritos, olvidándose del préstamo de soportes audiovisuales y la multimedia los cuales son parte de los servicios tradicionales de la biblioteca en cualquier parte del mundo. Esto sin contar con los servicios nuevos que se popularizan cada vez más por medio de la Internet.

Se debe decir que este artículo no busca una infructuosa polémica contra el derecho de autor universalmente reconocido. Lo que se quiere resaltar es que las bibliotecas son parte de la solución a las infracciones a la norma. Tradicionalmente estas instituciones han sido las más indicadas para ayudar al público en satisfacer sus necesidades de información sin perjudicar los legítimos beneficios de los autores, creadores o titulares de la propiedad intelectual.

Los editores y comercializadores de distintos documentos se han dado cuenta de que las bibliotecas constituyen un mercado nada despreciable para sus productos y servicios. De hecho lo son en otros países de la región como Colombia, Brasil, Argentina o Chile. Otro aspecto muy importante para los autores o editores de productos culturales es que la biblioteca puede convertirse en su aliado más seguro y permanente contra el incremento de la piratería editorial. Una biblioteca o mediateca permite al público el acceso a una serie de productos culturales que de otra manera, sea por el precio o por otros motivos, solo podría conseguir de manera ilegal.

El derecho de autor y su legislación

El derecho de autor es una materia compleja y en permanente mutación tanto en el ámbito nacional como internacional. De acuerdo con las diferentes prioridades nacionales, los países han elaborado legislaciones diferentes acerca del tema. Sin embargo, existe un elemento común en las diferentes legislaciones. Este es el énfasis en la protección de soportes en papel frente al continuo desarrollo de los soportes electrónicos, audiovisuales y virtuales cuya normativa está sujeta a continuas discusiones y cambios en las legislaciones nacionales.

Aunque existan diversas tradiciones legales acerca del derecho de autor, en Occidente predominan dos: la tradición legislativa europea y la tradición anglonorteamericana.

La tradición legislativa europea enfatiza la protección de los derechos morales frente a la tradición anglonorteamericana de proteger los derechos patrimoniales en detrimento de los primeros. De este modo la tradición anglonorteamericana ha dado menor

importancia a los derechos morales del autor y poca protección a la distorsión de los trabajos protegidos (un ejemplo de ello es la posibilidad de colorear por medio de algún software informático fotografías cuyo autor las hizo en blanco y negro²).

Otro punto en el ámbito mundial es el énfasis en los beneficios económicos de la explotación comercial del derecho de autor. No es casual la ampliación del tiempo de protección del derecho patrimonial del autor a setenta años. En este punto cabe señalar el cuestionamiento que se hace al pago por el préstamo público en las bibliotecas³.

Del mismo modo, existe, cada vez con mayor énfasis, el reclamo de la sociedad civil por un manejo y una legislación más justa con relación al Derecho de Autor y en general con respecto a la propiedad intelectual. Al respecto, es sugerente la tesis de Oswaldo de Rivero quien, en su obra *El mito del desarrollo: los países inviables en el siglo XXI*⁴, observa que frente a la necesidad de tecnologías modernas para sus industrias por parte de los países no industrializados (como son casi todos los de la región latinoamericana), hay una excesiva protección a la propiedad intelectual por parte de los países industrializados. Esto hace muy difícil el “replicar y adaptar tecnologías extranjeras” por parte de los países o regiones poco desarrolladas.

Acerca de la Organización Mundial del Comercio (OMC) señala su severidad con respecto a la protección de la propiedad intelectual y de las sanciones impuestas por los países industrializados para aquellos otros catalogados como “piratas intelectuales”. Sin embargo, Rivero hace bien en recordar que los hoy países protectores de la propiedad intelectual fueron en su momento unos verdaderos “piratas intelectuales” que “no tenían que enfrentarse a normas internacionales” como las de hoy. De esto modo recuerda que:

...La mayoría de los países no tenía leyes de patentes nacionales o, si las tenía, no estaban relacionadas a sanciones comerciales internacionales. Esto permitió replicar tecnologías. Casi todas las máquinas fueron copiadas, también muchas fórmulas químicas, el automóvil, el avión, la radio, el radar y otras miles de invenciones, sin que ningún país fuera calificado de pirata y amenazado con sanciones económicas⁵

Estos cuestionamientos deben ser tomados con seriedad por gentes de países pobres y grupos sociales desfavorecidos de los países ricos. En general, lo que se pretende es buscar extender el acceso a la cultura y a las tecnologías a la mayor cantidad de habitantes del planeta por sobre la protección excesiva que se da ahora a la propiedad intelectual. En este punto es que se hace necesario subrayar que la propiedad intelectual es un tipo muy especial de propiedad. Si aun la propiedad privada no es absoluta (por ejemplo, el Estado puede expropiarle a un individuo o institución una propiedad inmueble argumentando necesidades de carácter social, aunque esté obligado a pagar al propietario su valor), el consumo de la propiedad intelectual por una persona o

² FROELICH, Thomas J. *Survey and analysis of the major ethical and legal issues facing library and information services*. München : K. G. Saur, 1997 p. 28.

³ GIRON, Alicia y SALABERRIA, Ramón. ¿Lectura pública gratuita o derecho privado de explotación?. [En línea] <http://www.maratondelos cuentos.org/libro libre/actasdoc/indice.htm> [Consulta : 10 de abril del 2004]

⁴ RIVERO, Oswaldo de. *El mito del desarrollo : los países inviables en el Siglo XXI*. 2da. ed. Lima : Fondo de Cultura Económica, 2001. 266 p.

⁵ *Ibíd* p. 89.

personas, que no sean el autor, no disminuye el consumo que el autor haga. Lawrence Lessig lo propone de esta manera:

...Si, por ejemplo, escribo una canción, usted puede cantarla sin imposibilitarme a mí que la cante. Si escribo un libro, puede leerlo [...] sin que ello me impida a mí leerlo. Las ideas, en su núcleo, pueden compartirse sin que ello suponga una reducción de la cantidad que el “propietario” pueda consumir...⁶

De este modo, la protección a la propiedad intelectual es solo para asegurar que existan los suficientes incentivos para el progreso intelectual, social, científico y cultural de la sociedad. De allí, que si la ley permite, por ejemplo, que un crítico literario o cualquier persona cite partes o párrafos de una obra sin pedir permiso al autor; es porque se comprende que esta actividad (el uso lícito de las citas) aumentará la cantidad de crítica literaria y por ende la práctica intelectual y la riqueza social sin detrimento de los legítimos intereses del autor o del titular del derecho.

El derecho de autor en el Perú

El derecho de autor en el Perú se ha legislado como un derecho de propiedad. En la Constitución de 1823, apenas iniciada la vida republicana nacional, se declaraba la inviolabilidad de la propiedad intelectual. Luego, en 1849 se publica la primera Ley de Propiedad Intelectual que durará más de 110 años hasta la promulgación de la Ley sobre Derechos de Autor de 1961 (Ley 13714). Esta ley fue derogada por el Decreto Legislativo 822 de abril de 1996⁷.

Por otro lado, la autoridad encargada de velar por el cumplimiento de la legislación nacional sobre el tema es la Oficina de Derechos de Autor (ODA), que hasta antes de la creación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) en noviembre de 1992, estaba adscrita a la Biblioteca Nacional del Perú (BNP). Con la creación del INDECOPI, la ODA pasa a este instituto con el nombre que aún mantiene.

El Decreto Legislativo 822, llamado Ley sobre el Derecho de Autor, publicado y puesto en vigencia el 24 de abril de 1996 abarca los temas de los derechos morales y patrimoniales del autor, de los límites al derecho de explotación y su duración, del contrato de edición, de las sociedades de gestión colectiva, de las funciones administrativas del Estado y de las sanciones penales contra aquellos que infligen la norma legal. El Decreto Legislativo 822 ha buscado ser compatible con la normativa regional y mundial sobre el tema. Especial atención se tuvo con la Decisión 351 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que aprobó el Régimen Común sobre el Derecho de Autor y los Derechos Conexos. Del mismo modo, se tuvo cuidado de no entrar en contradicción con los siguientes acuerdos internacionales de los que el país es firmante:

- La Convención Universal de Derechos de Autor (el Perú es miembro de ella desde 1963 y del texto de 1971 desde 1985)
- El Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas (Perú es miembro desde 1988)

⁶ LESSIG, Lawrence. *El código y otras leyes del ciberespacio*. Madrid : Taurus. Grupo Santillana, 2001. p. 246.

⁷ ANTEQUERA PARRILLI, Ricardo y FERREYROS CASTAÑEDA, Marisol. *El nuevo derecho de autor en el Perú*. Lima : Perú Reporting, 1996 p. 4.

- Convenio de Roma para la Protección de los Artistas Interpretes o Ejecutores, Productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión (el Perú es miembro desde 1985)
- Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no autorizada de sus fonogramas (desde 1985 el Perú es firmante de este convenio)
- Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite (también miembro desde 1985)
- Acuerdo TRIPS (en inglés) o ADPIC (en castellano) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Este último acuerdo tiene como objetivo que los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) persigan y sancionen los ilícitos que se cometan en material de propiedad intelectual. El ADPIC no está específicamente en el marco de los convenios internacionales de Derechos de Autor o derechos conexos, sino en el ámbito del derecho comercial internacional.

Es importante subrayar los acuerdos internacionales firmados por el país. En especial el suscrito entre los países de la Comunidad Andina (Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena) pues las modificaciones que plantea este artículo para favorecer el acceso a la lectura y la cultura por parte del público en las bibliotecas peruanas deberán discutirse también en el ámbito regional.

Las bibliotecas peruanas

Así como el derecho de autor es una materia compleja y en constante cambio. Las bibliotecas en el mundo también han evolucionado. Las hay públicas y privadas, generales y especializadas, de acceso restringido, como es el caso de una biblioteca o archivo de una empresa y de acceso libre como es el caso de una biblioteca pública o municipal. En fin, hay diferentes clases de bibliotecas como también hay diferentes clases de usuarios. Sin embargo, los bibliotecarios, profesionales encargados de estas organizaciones, tratan de mantener unos principios éticos comunes. Entre estos se encuentran la permanente defensa por el acceso a la información para todos los ciudadanos, la lucha contra cualquier tipo de censura y la salvaguarda a la confidencialidad de las consultas del público.

En el Perú, para el año 2002, según la Biblioteca Nacional, existían 6975 bibliotecas⁸. De ellas figuraban 4369 como escolares, 2142 como públicas y 61 de universidades. Si se tiene en cuenta que para ese mismo año se registraba solo en centros educativos de educación inicial la cifra de 15860⁹ se puede apreciar la falencia de bibliotecas de todo tipo en el territorio peruano.

No se ha encontrado datos cuantitativos de cuántos libros se adquiere por parte de las bibliotecas públicas en el país ni cuánto es el gasto en servicios bibliotecarios por habitante. Tampoco el número de préstamos por habitante. **Se puede decir que en el país no existe una tradición bibliotecaria y es seguro decir que la mayoría de niños y jóvenes peruanos cursan sus estudios escolares sin recurrir a alguna biblioteca.** Muchos colegios públicos y privados tampoco tienen este servicio.

⁸ WEBB, Richard y FERNÁNDEZ BACA, Graciela. *Perú en números 2003 : anuario estadístico*. Lima : Instituto Cuánto, 2003. p.311

⁹ Ibid p. 296

El caso de las universidades no es menos clamoroso. El 2002 existían 69 universidades de las cuales 28 son públicas y 41 son privadas. Sin embargo, son pocas las que cuentan con servicios bibliotecarios que merezcan ese nombre¹⁰. Se desconoce también la situación de las bibliotecas de las prisiones, de los hospitales, de los albergues de menores y juveniles y en general de bibliotecas adscritas a instituciones de carácter social.

El acceso a Internet y la posibilidad de compartir recursos de información por medio de bibliotecas virtuales no puede ser vista como la solución al escaso equipamiento y desarrollo de las bibliotecas en el país. El compartir recursos, tradición de larga data en el mundo de las bibliotecas por medio del préstamo interbibliotecario y el canje, se convierte en la médula del servicio bibliotecario actual siempre y cuando exista bibliotecas actualizadas y con recursos de información en cantidad y calidad. Esta situación no existe en la gran mayoría de bibliotecas del país.

Ante tal precaria realidad de los servicios bibliotecarios nacionales tanto urbanos como rurales es que se debe hacer énfasis en una política nacional de fomento a la lectura y al derecho de acceso para todos los habitantes a la información y la cultura. De este modo, la legislación acerca de los derechos de autor debería de tomar atención en este aspecto y sopesarlo con los aspectos comerciales de la propiedad intelectual.

La ley actual de derecho de autor y el desarrollo de las bibliotecas peruanas.

En esta parte interesa conocer los artículos relacionados con el servicio de bibliotecas y archivos del Título IV del D.L. 822. El título IV lleva por nombre : *De los límites al derecho de explotación y de su duración* y permite una serie de prácticas que son lícitas sin pedir autorización al titular del derecho de autor ni remuneración alguna. Entre estas prácticas se encuentra el uso permitido para explicaciones didácticas, la reproducción lícita sin autorización, el préstamo público, el derecho de cita, las difusiones lícitas, las grabaciones efímeras, la retransmisión simultánea, la copia personal, la parodia, entre otras utilizaciones lícitas. Todas estas práctica corresponden a lo que el derecho anglonorteamericano se conoce como *fair use*.

A continuación trataré los puntos del título IV que son de especial interés para el trabajo de los bibliotecarios en el Perú.

Artículo 41. Las obras del ingenio protegidas por la presente ley podrán ser comunicadas lícitamente, sin necesidad de la autorización del autor ni el pago de remuneración alguna, en los siguientes casos: (...)

c) Las verificadas con fines exclusivamente didácticos, en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de tal institución, siempre que la comunicación no persiga fines lucrativos, directos ni indirectos, y el público esté compuesto exclusivamente por el personal y estudiantes de la institución o padres o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de la institución.

Comentario

De acuerdo al D.L. 822 se entiende por comunicación pública lo siguiente:

¹⁰ Para el 2002 el país tenía 69 universidades y solo se registraron 61 bibliotecas universitarias. Esto significaría que no se han registrado bibliotecas que estaban funcionando o lo que es más probable: la existencia de universidades sin servicios de biblioteca.

“Todo acto por el cual una o más personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueden tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, por cualquier medio o procedimiento, análogo o digital, conocido o por conocerse, que sirva para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes. Todo el proceso necesario y conducente a que la obra sea accesible al público constituye comunicación.”

Lo anterior significa que solo dentro de las aulas o ambientes de un colegio, una universidad, un instituto formativo público o privado se pueden proyectar documentos audiovisuales, entre otras obras, sin autorización del autor. Y esto solo exclusivamente para fines didácticos y solo para los miembros de esa comunidad académica. Sin embargo, ¿qué hay de las bibliotecas públicas? . Estas, de acuerdo con la ley, solo podrían exhibir documentos audiovisuales que hayan sido presentados hace más de setenta años. Los filmes posteriores, así fuera gratis su proyección y con fines culturales no podrían proyectarse salvo previa autorización expresa del propietario de los derechos. Como bien lo dice Carmen Gallegos, articulista de la revista *Butaca Sanmarquina*, acerca de la labor difusora de los cines clubes que se ven perjudicados, la ley “dejó de ser ciega y se convirtió simplemente en tuerta”¹¹.

Esto se afirma porque es práctica común que filmotecas o archivos filmicos hagan comunicación pública al difundir una serie de filmes de ficción o documentales. Esta labor permite cubrir los vacíos del comercio cinematográfico local y permiten acceder al público a una serie de filmes que de otra manera o no podrían verlos o estarían únicamente accesibles si se decide infringir la ley al adquirirlos en versiones piratas. Y es que existe una censura económica, como bien dice Christian Wiener en la revista *Butaca Sanmarquina*. Esta estaría dada por la que realizan los agentes del negocio cinematográfico (distribuidores y exhibidores) y que opera en casi todo el planeta. Para estos señores, las sacrosantas leyes del mercado, el público y su billete (que suponen conocer mejor que nadie) son suficiente argumento para determinar el posible estreno o no de una película, independientemente de los premios, distinciones, críticas o elogios de los que pueda estar precedida. Si esto no es censura, ¿de qué estamos hablando entonces?¹²

Otro artículo de importancia es el 43 que dice:

Artículo 43. Respecto de las obras ya divulgadas lícitamente, es permitida sin autorización del autor.

a). La reproducción por medios reprográficos, para la enseñanza o la realización de exámenes en instituciones educativas, siempre que no haya fines de lucro y en la medida justificada por el objetivo perseguido, de artículos o de breves extractos de obras lícitamente publicadas, a condición de que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro.

Comentario:

¹¹ GALLEGOS, Carmen. “Piratería universitaria: una función que debe terminar.” En: Butaca sanmarquina. Año 5 n°18 (2003) p.41

¹² WIENER, Christian. “La otra censura : sólo en pirata.” En: Butaca sanmarquina. Año 5 n°18 (2003) p.46

Está claro que quienes redactaron la ley pensaron que la enseñanza se fundamenta en la lectura de documentos impresos y en especial en el libro. Esto podría ser justificable para comentar una ley de fines del siglo XIX pero no para una de fines del XX. La enseñanza en todos sus niveles requiere de documentación variada y no solo impresa. Es tan legítimo fotocopiar partes de un libro como copiar partes de una videograbación o de un documento electrónico para fines docentes. Y es práctica común en el mundo civilizado hacerlo incluso, cada vez más, en la educación superior.

De este modo, el lugar ideal para la consulta de estos documentos es la biblioteca. Sin embargo, además de solo contemplar la fotocopia de documentación impresa, la ley, al señalar que esta práctica es solo lícita en instituciones educativas, deja de lado a las bibliotecas o archivos públicos que también pueden, ocasionalmente, necesitar fotocopiar artículos de revistas o breves extractos de libros o copiar partes de documentos electrónicos o en línea.

c) La reproducción individual de una obra por bibliotecas o archivos públicos que no tengan directa o indirectamente fines de lucro, cuando el ejemplar se encuentre en su colección permanente, para preservar dicho ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización, o para sustituir en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado, siempre que no resulte posible adquirir tal ejemplar en plazo y condiciones razonables.

Comentario:

Para efectos del Decreto Legislativo 822 se entiende por Reproducción la *Fijación de la obra o producción intelectual en un soporte o medio que permita su comunicación, incluyendo su almacenamiento electrónico, y la obtención de copias de toda o parte de ella.*

Este artículo es de gran importancia para el servicio bibliotecario pues permite la copia de un ítem de la colección permanente de una biblioteca cuando el profesional bibliotecario considere que el ítem corre riesgo de deterioro. Sin embargo, es importante hacer recordar a los legisladores que una biblioteca no solo es una colección de documentos impresos. Una biblioteca comprende una serie de soportes de información como libros, revistas, videograbaciones, documentos electrónicos en disco compacto, grabaciones sonoras, microformas, etc. De este modo, deben estar comprendido en esta acápita todos los documentos conocidos o por conocerse. Debe enfatizarse esto pues, como se verá cuando se hable del préstamo público, este ha sido limitado a obras “expresadas por escrito”, es decir, un gran despropósito.

Otra anotación que debe corregirse es lo referido a la colección permanente. Cada vez más y con mayor intensidad, la biblioteca se centra en el acceso por parte del público usuario, a información que no es propiedad de la misma. Este punto no es nuevo pues el préstamo interbibliotecario ya lo permitía desde hace por lo menos dos siglos. Lo nuevo es dar acceso a la información de interés para el público en tiempo real y desde distintos puntos como puede ser el mismo domicilio del interesado, mediante los servicios en línea. Es decir, a medida que avance el tiempo, las colecciones de la biblioteca serán parte de una gran propiedad compartida con otros servicios de información. De este modo, las bibliotecas almacenan documentos temporalmente o permanentemente como parte de un servicio de entrega electrónica de documentos. Y en consecuencia, la práctica de los bibliotecarios es hacer una copia de algunos de estos documentos virtuales en los servidores de la institución para fines de preservación

Volviendo al D.L. n° 822 se tiene en el inciso f) del artículo 43 un punto controversial que afectaría el servicio de préstamo de material audiovisual y electrónico en las bibliotecas. Este inciso dice:

Artículo 43. Respecto de las obras ya divulgadas lícitamente, es permitida sin autorización del autor.

f) El préstamo al público del ejemplar lícito de una obra expresada por escrito, por una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa o indirectamente fines de lucro.

Ricardo Antequera y Marysol Ferreyros en su obra: *El nuevo derecho de autor en el Perú* a la letra dicen acerca del inciso f):

1. Se limita al préstamo, el cual obviamente debe ser gratuito
2. Debe ser efectuado en relación con una obra expresada por escrito, de manera que no se permite el préstamo de otros soportes, como las grabaciones sonoras o audiovisuales
3. Solamente es lícito cuando lo efectúa una biblioteca o archivo, y no otra clase de institución, siempre que las actividades desarrolladas por esas bibliotecas o archivos, no tengan directa o indirectamente fines de lucro, lo que excluye el que realice, por ejemplo, una empresa comercial¹³.

Comentario

Anteriormente se mencionó que es práctica tradicional, en toda clase de bibliotecas, el préstamo de diferentes soportes de información y no solo los impresos. Bibliotecas públicas, escolares, universitarias y de otros tipos; en todo el mundo, mantienen amplias colecciones de grabaciones sonoras o videograbaciones de música, charlas, películas de cine, documentales, conferencias, cursos, etc. que son prestadas al público usuario para sala o domicilio sin mayor requisito que el carné de usuario. Sin embargo, en el Perú se ha decidido que esto no es posible. Ante tremendo despropósito legal lo único que queda a los bibliotecarios en el Perú es reunir esfuerzos de toda la sociedad civil para la modificación respectiva.

Conclusión

Las normas legales de derecho de autor deben ser elaboradas con una visión amplia que tome en cuenta el fomento a la lectura y a la cultura por parte de todos los ciudadanos. La visión que se aprecia hoy en día da la impresión de solo enfatizar los aspectos económicos o patrimoniales del derecho de autor y de la propiedad intelectual.

En el caso peruano las modificaciones que el autor plantea son las siguientes: la libre comunicación pública y el préstamo público de obras audiovisuales y electrónicas originales sin restricción para todas las bibliotecas y archivos. Así mismo, el permiso, sin necesidad de pago alguno, de reproducir pequeños extractos de obras audiovisuales y electrónicas. También el reproducir con fines de preservación y reemplazo, en caso que la obra no se pueda obtener en el mercado local o internacional, de obras audiovisuales y electrónicas para todas las bibliotecas y archivos.

¹³ ANTEQUERA PARRILLI, Ricardo y FERREYROS CASTAÑEDA, Marisol. *Ob.Cit.* p.167

Todas estas modificaciones son parte del sentido común y ayudarán a las sociedades a combatir la piratería editorial al posibilitar que las grandes mayorías, que no tienen recursos económicos para adquirir copias legales de cualquier tipo de obra en cualquier soporte, cuenten con bibliotecas y archivos que les permitan acceder a todo tipo de documentación. Y estas instituciones y su personal trabajarán con tranquilidad sabiendo que cuentan con un marco legal de derecho de autor adecuado para un servicio público de primera necesidad como es el de la biblioteca.

Claro está que para lograr este objetivo las modificaciones que se plantean tienen que ser estudiadas también dentro de los acuerdos regionales sobre el tema, en especial con los países del Acuerdo de Cartagena. Es importante tener políticas comunes para sustentarlas y defenderlas en las instituciones globales como es el caso de la OMC.

Bibliografía

ANTEQUERA PARRILLI, Ricardo y FERREYROS CASTAÑEDA, Marisol. *El nuevo derecho de autor en el Perú*. Lima : Perú Reporting, 1996, 571p.

FROEHLICH,, Thomas J. *Survey and analysis of the major ethical and legal issues facing library and information services*. München : K. G. Saur, 1997, 97p.

GALLEGOS, Carmen. “Piratería universitaria: una función que debe terminar. En: Butaca sanmarquina.” Año 5 n°18 (2003), p. 40-41.

GIRON, Alicia y SALABERRIA, Ramón. ¿Lectura pública gratuita o derecho privado de explotación?. [En línea] <http://www.maratondeloscuentos.org/librolibre/actasdoc/indice.htm> [Consulta : 10 de abril del 2004]

LESSIG, Lawrence. *El código y otras leyes del ciberespacio*. Madrid : Taurus. Grupo Santillana, 2001, 540 p.

PERU. Decreto legislativo 822 : Ley sobre el Derecho de Autor. Publicado en el diario El Peruano el 24 de abril de 1996. En: Normas Legales : Revista de Legislación y Jurisprudencia. Vol. CCXXXIX. Tomo 239. Abril de 1996, p. 421-456.

RIVERO, Oswaldo de. *El mito del desarrollo: los países inviables en el Siglo XXI*. 2da. ed. Lima : Fondo de Cultura Económica, 2001, 266 p.

WEBB, Richard y FERNÁNDEZ BACA, Graciela. *Perú en números 2003: anuario estadístico*. Lima : Instituto Cuánto, 2003, 1262 p.

WIENER, Christian. “La otra censura: sólo en pirata.” En: Butaca sanmarquina. Año 5 n°18 (2003) p. 46.